

Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR 23)

Consulta: Directrices de buenas prácticas - Respuesta

"Incentivos reglamentarios y económicos para un futuro digital inclusivo y sostenible"

"Incentivos reglamentarios y económicos para un futuro digital inclusivo y sostenible"

El objetivo de esta consulta es explorar un marco de incentivos reglamentarios y económicos que promueva el despliegue de infraestructuras TIC, facilite un acceso equitativo y asequible a las tecnologías digitales, no obstaculice el gasto de capital y la instalación de redes, y reduzca las asimetrías en todo el ecosistema digital, garantizando al mismo tiempo que los gobiernos reciban los recursos financieros necesarios para prestar servicios públicos.

Definición de incentivos regulatorios y económicos que estimulen el despliegue de infraestructuras digitales sostenibles, especialmente en zonas rurales y aisladas.

Aunque los operadores llevan muchos años trabajando para cerrar la brecha de conectividad en América Latina, las zonas rurales y aisladas siguen siendo un reto importante. La CEPAL calcula que, en la región, la penetración de usuarios de Internet ronda el 60% en las zonas urbanas, pero disminuye hasta el 35% de media o incluso hasta el 10% en las zonas rurales de algunos países.

Telefónica considera que trabajar para cerrar la Brecha Digital requiere una reconsideración de las políticas públicas en vigor, y por esta razón, Telefónica desarrolló un [Manifiesto Rural](#) donde recogemos nuestras propuestas para el desarrollo de modelos de negocio de redes rurales exitosos y sostenibles. En el centro de nuestro Manifiesto está la idea de que la regulación y las políticas públicas deben ser facilitadores y no obstáculos para extender la conectividad rural.

Nuestra propuesta consiste esencialmente en replantear las estrategias actuales y desarrollar marcos normativos específicos para las zonas rurales, basados en nuevos enfoques de política pública centrados en torno a 5 elementos:

- **Fomentar la innovación:** En términos de tecnología, utilizando tecnologías emergentes y permitiendo su uso flexible. En términos de financiación, facilitando el desarrollo de nuevos modelos de negocio para atraer inversiones de otros sectores y facilitar la colaboración público-privada. En términos de regulación, promoviendo marcos regulatorios más ligeros para fomentar el desarrollo de redes en las zonas rurales, junto con la consideración de nuevas medidas regulatorias tales como *sandboxes* para reducir las cargas regulatorias, la posibilidad de pago por el espectro a través de obligaciones de conectividad frente a pagos en efectivo, y la reducción o eliminación de las tasas regulatorias (contribución a los Fondos del Servicio Universal, tasas de espectro ...) para los servicios rurales que pueden ayudar a fomentar la inversión en estas zonas.
- **Fomentar la colaboración:** Es importante fomentar y facilitar la colaboración público-privada y las alianzas entre distintas partes (públicas, privadas y ONG) para hacer viables los proyectos de conectividad rural. Las medidas para facilitar y fomentar el uso compartido de infraestructuras para generar una mayor eficiencia operativa y financiera son especialmente clave para las zonas rurales. Además, es necesario replantear las políticas de espectro en cuanto a su acceso y flexibilidad en su uso, pasando de un modelo de gestión del espectro centrado en la captación de fondos a otro centrado en

el rápido desarrollo de redes y servicios, especialmente en zonas rurales o menos atractivas.

- **Liberar recursos para las inversiones:** No se puede invertir si la industria no dispone de los recursos necesarios. Es necesario reconsiderar muchos elementos para liberar fondos para nuevas inversiones. El más importante tiene que ver con el costo del espectro, que sigue siendo muy alto en América Latina, pero también con aspectos como las políticas fiscales, que entre otras cosas imponen una alta carga impositiva a nuestra industria. Además, aspectos como un uso eficiente y eficaz de los Fondos de Servicio Universal pueden marcar la diferencia a la hora de extender la conectividad en zonas rurales.
- **Facilitar el despliegue de infraestructuras:** Es importante que gobiernos y reguladores colaboren para reducir los trámites burocráticos y los costes administrativos del despliegue de infraestructuras en general, pero aún más en las zonas rurales. Además, debe facilitarse el uso de infraestructuras públicas por parte de los operadores.
- **Reducir o eliminar las barreras técnicas:** Como la aplicación de obligaciones de mimetismo medioambiental de las infraestructuras y permitir a las empresas seleccionar la tecnología adecuada a desplegar y garantizar así la neutralidad tecnológica.

Nuevos modelos de negocio como [Internet Para Todos en Perú](#) (IpT), basados en los 3 ejes principales de innovación, cooperación y sostenibilidad, demuestran cómo modelos innovadores pueden funcionar para cerrar la brecha digital en zonas rurales. A través de una alianza entre Telefónica, Meta, CAF y BID Invest, desde 2019 IpT ha llevado acceso 4G a 3,2 millones de peruanos de zonas rurales a través de su modelo de tecnología abierta que incorpora infraestructura de acceso compartido/*RAN Sharing* y utiliza tecnologías como IA y Big Data para automatizar procesos y reducir costos. La red móvil mayorista de IpT es neutral y está abierta a todos los operadores móviles de Perú. La flexible normativa peruana para zonas rurales ha permitido el desarrollo de un exitoso modelo de negocio con excelentes resultados.

Muchas de las propuestas mencionadas anteriormente, que dieron origen al concepto IpT, también pueden encontrarse reflejadas en la resolución AG/RES. 2966 (LI-O/21) de la OEA y su propuesta de 21 puntos de iniciativas para ampliar las telecomunicaciones y las TIC a las zonas rurales, prueba de que existe una conciencia, no sólo por parte de los operadores sino también de los reguladores, de que la revisión de las estrategias reguladoras actuales es esencial para alcanzar los objetivos de conectividad rural y despliegue de infraestructuras digitales.

Identificación de los incentivos adecuados necesarios para garantizar la introducción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y modelos de negocio emergentes

Los beneficios de la conectividad y la digitalización y la necesidad de fomentar nuevas tecnologías y modelos de negocio son incuestionables. Para avanzar en estos objetivos, es necesario no solo aplicar una nueva regulación que fomente el despliegue de nuevas tecnologías y redes, sino también reconsiderar *cómo* se aplican las regulaciones nuevas y existentes, para qué sirven y si son realmente necesarias. Existe el riesgo de que la regulación desincentive las inversiones y el despliegue de redes si no se adapta a la realidad.

Una revisión de la regulación para identificar qué normativas son realmente necesarias y cuáles son redundantes ayudaría a aliviar una serie de retos, haciendo que las nuevas inversiones sean

más viables y sostenibles. La regulación puede ser un importante facilitador, y no un inhibidor, de la inversión, y los reguladores deben desempeñar un papel en el compromiso con la industria para identificar qué cambios son necesarios para hacer evolucionar las políticas públicas y alcanzar la 5ª generación de la regulación, según la definición de la UIT. Entre las muchas reformas que, en nuestra opinión, podrían plantearse y que contribuirían a fomentar el aumento de la inversión y la innovación, las principales son:

- Reducción de la carga regulatoria mediante la eliminación de normativas obsoletas que no hacen sino aumentar la burocracia general, incrementando el tiempo y el coste de las redes y servicios tanto existentes como en fase de despliegue.
- Del mismo modo, los marcos reguladores mejorarían con la aplicación de las Evaluaciones del Impacto de la Regulación y las Evaluaciones de los Resultados de la Regulación, que ayudarían a implicar a accionistas más diversos en la creación de la regulación y el análisis de los impactos deseados, así como a aumentar la confianza en la necesidad continuada de las regulaciones en vigor.
- Para atraer inversiones a largo plazo, la seguridad jurídica es clave. Este concepto incluye disponer de agencias reguladoras que tomen decisiones ponderadas y trabajen en cuestiones como la estructura del mercado (evitando una concentración excesiva del mercado) y en la mejora de la previsibilidad de la regulación.
- La implantación de modelos innovadores como los *Sandboxes* y la experimentación permitiría una mayor variedad de iniciativas individuales y colaborativas para desarrollar nuevas soluciones a viejos problemas, como la brecha digital entre zonas rurales y urbanas o la reducción de la brecha de uso para las poblaciones con bajos ingresos, de formas nuevas e innovadoras.
- Una modernización de los marcos reguladores para ajustarse mejor a las tendencias actuales del mercado, adaptando la regulación a las nuevas necesidades de clientes, reguladores y operadores. Una regulación flexible y dinámica es clave para adaptarse a la rápida evolución del mundo digital y ayudaría a implantar las tecnologías emergentes con mayor rapidez y a llegar a todos los sectores de la sociedad.
- Una reducción o reconsideración de las tasas reguladoras y las cargas fiscales sobre los servicios de telecomunicaciones, ya que en algunos países el sector de las telecomunicaciones se enfrenta a una carga fiscal comparable a la impuesta a las industrias de artículos de lujo. En este mismo sentido, la imposición de las mismas tasas y cargas fiscales para los servicios rurales y urbanos dificulta el despliegue y la adopción de servicios en estas áreas, ya que los argumentos comerciales para los servicios rurales ya son menos atractivos y, en muchos casos, la población de las zonas rurales tiene niveles de ingresos más bajos.
- Permitir un uso flexible del espectro, ya que esta flexibilidad aumentará la eficiencia general del uso del espectro y garantiza una asignación más rápida del espectro al usuario que genere más valor.

Por último, hay que fomentar la colaboración a todos los niveles del sector. Puede ser entre el sector público y el privado, en la revisión o el diseño de nuevas normativas, o en el desarrollo conjunto de nuevos modelos de negocio, como con la iniciativa Internet para Todos de Telefónica para extender la conectividad en las zonas rurales de Perú.